

Consejería de Medio Ambiente encomienda a su Gabinete de Proyectos la elaboración del proyecto referenciado, así como el documento ambiental que requiere el RDL 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.

Segundo. El proyecto, según lo descrito en la adenda y en el documento ambiental que lo acompaña, se encuentra incluido en el apartado b) del grupo 9 de <<Otros proyectos. Instalaciones de eliminación de residuos no incluidas en el anexo I>> del Anexo II del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, por lo que debe ser el órgano ambiental el que determine el sometimiento o no del citado proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental.

Tercero. A estos efectos, la Consejería de Medio Ambiente, mediante Orden nº. 952, de fecha 27 de agosto de 2013, vino en abrir un periodo de consultas (BOME nº 5057 de 3 de septiembre de 2013) a fin que aquellas administraciones públicas, instituciones y personas que se consideren previsiblemente afectadas pudieran presentar sus consideraciones sobre la necesidad de someter el proyecto al procedimiento de evaluación de impacto ambiental y, en este caso, los aspectos ambientales más significativos que el promotor debiera considerar en la elaboración del estudio de impacto ambiental, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.2 del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos.

Cuarto. Durante la fase de consulta, y mediante escrito de 10/10/2013, el colectivo Guelaya-Ecologistas en Acción de Melilla estima que dicho proyecto ha de someterse a procedimiento de evaluación ambiental, atendiendo a los siguientes efectos que el colectivo considera como negativos:

1. Sobre la salud de las personas y la Atmósfera, ya que durante las etapas de construcción y explotación se generarán ruidos, polvo, vibraciones y malos olores que repercutirán negativamente sobre la población, especialmente la que reside más cerca de la zona en la que la Ciudad Autónoma de Melilla quiere actuar, sumándose estos efectos negativos a los que actualmente se generan por la actividad normal de la Incineradora de Melilla.

2. Sobre la ocupación del terreno, debido a la alteración que sufrirá el actual vertedero de inertes, repercutiendo en la disminución de capacidad del mismo y por consiguiente sobre su vida útil.

3. Sobre la fauna y flora autóctona silvestre. Las aves protegidas que habitan o anidan en los acanti-

lados de Horcas Coloradas son susceptibles, en gran medida, de sufrir afecciones negativas en la fase de construcción y explotación. Así mismo, tampoco recoge el documento las posibles afecciones negativas que pueden sufrir las poblaciones de *Patella ferruginea* presentes en la escollera de cerramiento del actual depósito de inertes y en los acantilados y rocas cercanas, tanto en la zona de la Ensenada de los Galápagos como en la zona de Horcas Coloradas y Aguadú, como consecuencia de los posibles lixiviados y derrames contaminantes que podrían producirse en las instalaciones.

4. Sobre la eficiencia en el tratamiento de residuos, ya que la tendencia actual en todos los países de la Unión Europea es la erradicación de la incineración en pro de otra forma de gestionar los residuos más acorde y respetuosa con la conservación medioambiental. Invertir en instalaciones o infraestructuras como la que plantea la Consejería de Medio Ambiente de Melilla, basadas en la incineración de residuos, supone retrasar incomprensiblemente la aplicación de las políticas europeas en la Ciudad Autónoma de Melilla.

#### FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero. La Consejería de Medio Ambiente es el órgano medioambiental competente para resolver este expediente en virtud de lo dispuesto en el artículo 5.2.g) del Acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 26 de agosto de 2011, relativo a la distribución de competencias entre las Consejerías (BOME Ext. nº. 20, de 20 de Agosto de 2011).

Segundo. El artículo 16 del citado Real Decreto Legislativo 1/2008 determina que la persona física o jurídica, pública o privada, que se proponga realizar un proyecto de los comprendidos en el anexo II solicitará del órgano que determine cada comunidad autónoma que se pronuncie sobre la necesidad o no de que dicho proyecto se someta a evaluación de impacto ambiental, de acuerdo con los criterios establecidos en el anexo III.

Tercero. Asimismo, el artículo 17 del citado Real Decreto establece que el órgano que reciba la solicitud a la que se refiere el artículo anterior se pronunciará sobre la necesidad de que el proyecto se someta o no a evaluación de impacto ambiental en el plazo que determine la comunidad autónoma, si bien previamente se consultará a las administraciones, personas e instituciones afectadas por la realización del proyecto, poniendo a su disposición el documento ambiental del proyecto.

Cuarto. Durante el periodo de consultas a las administraciones públicas, instituciones y personas que se consideren previsiblemente afectadas,